

AJUSTE Y PROGRESO SOCIAL EN MÉXICO *

DAVID IBARRA

I

Se ha vuelto un lugar común afirmar que la crisis económica de México es la más profunda, prolongada y generalizada que se ha presentado desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis está lejos de haber terminado. Por ello, constituye un peligroso error asumir que los desequilibrios financieros están desapareciendo. En términos generales, tanto el gobierno como el país se encuentran en 1986 en posición más débil para hacer frente a los problemas económicos nacionales, de lo que se encontraban en 1982.

El producto per cápita decreció más de 10% entre 1981 y 1985. Su nivel es similar hoy al registrado hace ocho o nueve años. El ingreso nacional está aún más deprimido (12%), a juzgar por el deterioro de los términos de intercambio (16.5%) y el incremento en el servicio de la deuda externa. Existen grupos sociales dentro del país que es posible hayan perdido entre una cuarta y dos quintas partes de su ingreso anterior.

En términos de la disciplina interna, el esfuerzo de ajuste a un marco externo severo, ha sido enorme. A fin de combatir la inflación y pagar el servicio de la deuda, el crecimiento, el consumo privado y el gasto privado del gobierno han sido recortados drásticamente. Es pertinente referirse al caso del déficit en cuenta corriente de la balanza

* Documento publicado en *Human Development, Adjustment and Growth*, K. Hag y N. Kirdar, editores. Mesa redonda Norte-Sur, Islamabad, Pakistán, 1987. Traducción de Victoria Brocca Andrade.

de pagos que alcanzó 14.1 billones de dólares en 1981, un superávit de 3.7 billones en 1984 y se encontraba en equilibrio en 1985; en forma similar, la balanza comercial se desplazó de un déficit de 4.6 billones de dólares a un superávit de 14 y 9 billones en 1984 y 1985, respectivamente. Sin embargo, estos extraordinarios resultados no se debieron a un crecimiento de las exportaciones —las cuales se redujeron en cerca de 4% a pesar de un incremento de 45% en su volumen—, sino a una aguda caída recesiva de las importaciones (44%), esto es, de las compras necesarias para proporcionar insumos estratégicos o para sostener la formación de capital.

De igual manera, los flujos netos de ahorro externo (créditos netos más inversión externa neta menos pagos por concepto de intereses y utilidades) cambiaron de signo; en lugar de contribuir en forma positiva con cerca de 13.8 billones de dólares a la inversión interna, como ocurrió en 1981, representaron una salida superior a los 9 billones de dólares en 1985 (ECLAC). No es sorprendente observar, por consiguiente, una disminución de más de siete puntos en el coeficiente de inversión (de 1980 a 1985) y, consecuentemente, una menor capacidad de crecimiento o de emprender los altamente requeridos cambios estructurales como, por ejemplo, la transformación del sector exportador tradicional.

Durante el mismo periodo (1981-1985), la deuda externa de México aumentó de 74.9 a 97.8 billones de dólares (Banco de México), debido no tanto a las entradas de recursos frescos sino más bien como resultado de los intereses capitalizados que fueron acordados *de facto* en el proceso de renegociación. El servicio de la deuda es equivalente actualmente (1986) a 70% de las exportaciones totales de bienes y servicios y constituye la fuente más importante de los déficit fiscales.

A pesar del relajamiento de las presiones inflacionarias mundiales y de la implantación de las políticas restrictivas de ajuste del FMI, la inflación, lejos de ceder, parece estar ganando fuerza con el tiempo. Entre 1979 y 1981 la inflación creció a una tasa anual promedio de 26%, pero en 1983 aumentó a 99%, decreciendo a 59% en 1984, para volver a subir en 1985; durante los primeros seis meses de 1986 alcanzó un equivalente anual de 100%. Presiones derivadas del empuje de costos y una extendida insatisfacción social con respecto a los efectos distributivos del proceso de ajuste, transformaron a la inflación en un fenómeno que no puede ser corregido simplemente a través de un mayor endeudamiento. Más aún, la caída de los precios del

petróleo registrada durante 1981 han nulificado los esfuerzos realizados hasta ahora, haciendo inevitables nuevos sacrificios.

II

El supuesto de que la crisis de la deuda se basa en errores de política pasados sea por parte de los gobiernos endeudados o de los acreedores, es quizás simplista ya que no percibe la verdadera naturaleza del problema. En forma subyacente a los cambios estructurales de la economía mundial se encuentran las nuevas brechas abiertas entre el Norte y el Sur, cambios que explican también la reducida capacidad de los centros industriales para promover el crecimiento en el mundo en desarrollo a través de la ayuda financiera o, precisando más, por medio del acceso liberal a los mercados de bienes.

De esta manera, vale la pena enfatizar algunos de los vínculos funcionales importantes que existen entre las finanzas, el comercio y el crecimiento. Sin la entrada de flujos netos de capital, cuando la tasa de expansión de una economía dada se encuentra por debajo de la tasa de interés, el servicio de la deuda externa sólo puede ser cubierto mediante una reducción del consumo doméstico. Por otra parte, usando el mismo supuesto, cuando la tasa de crecimiento de los ingresos por exportaciones es menor a la tasa de interés, la capacidad de cubrir el servicio de la deuda sólo puede ser fortalecido disminuyendo las compras al exterior (Ibarra, 1986, b). Por consiguiente, cuando tanto el consumo (12%) como las exportaciones (44%) han sido reducidas en forma drástica durante más de la mitad de una década, y se está en medio de presiones demográficas aún altas, es natural encontrar frustración y resistencia al tratar de promover las medidas de ajuste.

Históricamente, los gobiernos que se han visto abrumados por dislocaciones económicas de corto plazo, rara vez han sido capaces de tomar las medidas necesarias para transformar a la economía y a la sociedad en la dirección adecuada. Una razón que podría explicar esta situación la constituye la desvaneciente legitimidad política asociada a la contracción de los niveles de ingreso y empleo que se presentan cuando esto se extiende por periodos prolongados.

La experiencia reciente de América Latina demuestra claramente que existen fuertes asimetrías asociadas a la distribución de los costos

del ajuste. No sólo el tipo de ajuste patrocinado por algunas de las instituciones financieras internacionales posee dicho sesgo, sino que también en éstos se encuentran presentes disparidades agudas en el poder político entre los diferentes estratos sociales. Adicionalmente y desde un punto de vista pragmático, los gobiernos se inclinan a recortar más los salarios que las utilidades en la creencia de que estas últimas habrán de jugar un papel clave en cualquier intento futuro que esté dirigido a la reanudación del crecimiento económico.

Aun cuando estas tendencias describen el caso mexicano, existen algunas particularidades importantes que deben ser señaladas. En primer lugar, la fuerza de trabajo se encuentra organizada en una federación nacional de sindicatos (la cual constituye uno de los tres grupos electorales sectoriales dentro del partido político más importante, el PRI) que ha cooperado tradicionalmente con el gobierno, sea a cambio de beneficios económicos o de poder y participación abiertos en el juego político doméstico.

Dada la naturaleza organizativa circundante de la federación de sindicatos (CTM) —en el sentido en que la emplea Olson (Olson, 1982)— y su papel de mediador frente al Estado, resulta lógico esperar que la fuerza laboral prefiera recortes salariales a un incremento del desempleo como su contribución al proceso de ajuste que ha sido decidido por las autoridades nacionales.¹

En segundo lugar, la administración anterior tomó medidas drásticas (1982) en lo que se refiere a la promulgación del control de cambios y nacionalizando los bancos comerciales privados, rompiendo de esta manera con la política financiera liberal tradicional que había sido seguida por los gobiernos mexicanos (Ibarra, 1985). Ahora bien, aun cuando estas medidas eran adecuadas desde un punto de vista técnico, tuvieron efectos laterales que generaron nuevas divisiones sociales entre las empresas y el gobierno. La historia de la política económica posterior a 1982 es en gran medida un recuento de los esfuerzos gubernamentales para restablecer totalmente la confianza empresarial, al mismo tiempo que se tomaban medidas para acomodar la economía a circunstancias que eran más bien desfavorables.

En tercer término, el paradigma económico conservador prevaleciente tanto en casa como en el exterior, tuvo el efecto de intensificar la profundidad y de acortar el tiempo del ajuste macroeconómico sobre

¹ No se cuenta, adicionalmente, con seguros de desempleo, las pensiones son bajas y no están alineadas con la tasa de inflación.

la demanda. Hasta el momento, los bancos y los gobiernos extranjeros se han negado a aceptar su participación en la carga de la deuda, y las autoridades mexicanas no han estado, por su parte, en posición de adoptar una postura firme a nivel internacional sobre esta cuestión. De esta manera, el impacto del ajuste ha sido absorbido domésticamente y, en su mayor parte, mediante la quiebra del compacto conjunto social que solía proteger las participaciones de los trabajadores y empleados dentro del ingreso nacional.

Cuarto, el "récord" mexicano demuestra la prevalencia de una pronunciada asimetría temporal entre el ajuste sobre la demanda agregada y el ajuste por el lado de la oferta. La adaptación del gasto público y privado a las restricciones externas de pagos, si bien no es fácil, está probando ser una tarea que puede llevarse a cabo bastante rápidamente. Desafortunadamente, el punto crítico del dilema de la deuda yace en otra parte. A fin de encontrar soluciones adecuadas, México requiere modernizar sus actividades productoras y exportadoras, así como democratizar tanto el diseño como la implantación de su política económica. Sin embargo, dicho esfuerzo habrá de requerir tiempo, un cambio significativo en la asignación de recursos, una reforma política y una situación mundial favorable. Desafortunadamente, estas precondiciones se encuentran mucho más allá del alcance de las políticas de manejo de demanda de corto plazo (Ibarra, 1986).

Debido a los factores que han sido mencionados más arriba, argumentamos que el crecimiento declinante está provocando desplazamientos regresivos sin precedente en los patrones de distribución del ingreso, a través de los cuales, una vez más, el ingrediente humano en el desarrollo está siendo socavado. La lógica que busca la restauración de la confianza empresarial como un componente clave para el inicio de un proceso fresco de formación de capital, condujo a intentar proteger las utilidades y a hacer que los costos del ajuste recayeran fundamentalmente sobre los trabajadores y el sector público.

En la práctica, sin embargo, las empresas privadas están sujetas a un proceso desigual de contracción de las utilidades. Las políticas monetarias restrictivas y la prioridad otorgada al financiamiento de los déficit del sector público están desplazando la demanda de fondos prestables por las empresas fuera del sistema bancario. De igual manera, la drástica caída de los sueldos y salarios está reduciendo el nivel y modificando la composición de la demanda agregada. Como consecuencia, se están teniendo mayores coeficientes de exceso de capaci-

dad y la desalineación de las estructuras de la oferta y la demanda, factores todos que reflejan las presiones inflacionarias de costos y que producen espirales descendentes en la actividad económica. Los efectos dañinos no se distribuyen uniformemente; más bien están concentrados en las pequeñas y medianas empresas y sobre las empresas estrechamente vinculadas a la formación de capital (industrias de la construcción y de bienes de capital); esto es, sobre las actividades que cuentan con el mayor potencial de empleo o la mayor capacidad para sostener el crecimiento autónomo en el largo plazo.

En resumen, después de cinco años de esfuerzos de ajustes y de pérdidas significativas en el bienestar humano, la economía mexicana está lejos de haber alcanzado el sendero del crecimiento y la estabilidad. Por primera vez en casi medio siglo de contar con un progreso estable no se ha logrado ni el crecimiento económico ni avances sociales, en tanto que la resistencia del sistema político está cada vez más en juego.

III

Desde la década de los cuarenta hasta fines de los años setenta, México alcanzó altas tasas de crecimiento económico sostenido (el producto nacional bruto se elevó más de 11 veces en términos reales en ese periodo). El ritmo de la industrialización fue también impresionante (8-9% anual), lo mismo que el de la urbanización (para 1980 los residentes de los centros urbanos representaban más de 53% de la población, en comparación con 35% en 1940). Como resultado de lo anterior, las instituciones nacionales y las estructuras económicas básicas experimentaron transformaciones dramáticas. En términos generales, el progreso social provocó que se elevara el nivel de vida de la población, y a pesar de los serios defectos que lo caracterizaron y que todavía prevalecen, existía una confianza generalizada sobre la posibilidad de reducir la brecha de la pobreza.

De 1950 a 1980 el analfabetismo cayó de 44 a 17%. Como se indica en los cuadros 1 y 2, la matrícula escolar total creció a una tasa anual de 6% y la de educación media y universitaria alcanzó una impresionante tasa de crecimiento de más de 12% anual. En forma similar, los programas de salud y las instalaciones sanitarias fueron enormemente expandidas. La adscripción a los diferentes sistemas de seguridad social se elevó de uno a cerca de 31 millones de personas en ese

periodo. La mortalidad infantil se redujo en 60%, en tanto que entre 1940 y 1980 la esperanza de vida al nacer creció de 41.5 a 64 años (cuadros 3 y 4).

La estructura y nivel de empleo cambió significativamente en las tres décadas anteriores a 1980: la fuerza de trabajo se expandió 2.5 veces, en tanto que la participación del empleo en las actividades de creció a la mitad.

El cambio estructural y el rápido crecimiento económico solieron ser las fórmulas básicas empleadas para cancelar las crecientes demandas sociales con una más bien desigual distribución del ingreso (justificada en cierto sentido por la necesidad de promover la acumulación de capital). El coeficiente de Gini estimado para México es alto y ha fluctuado alrededor de 0.5 a partir de los años cincuenta (Kalifa, 1982; Hernández, 1982). Por su parte, tanto el crecimiento de la inversión pública como de la inversión privada se situó en cerca de 7% anual, como lo indican los registros de las pasadas tres o cuatro décadas.

La política fiscal ha jugado un papel clave en el proceso de crecimiento. El gasto pública ha sido utilizado extensivamente para subsidiar y crear economías externas en beneficio de las actividades empresariales privadas. Igualmente, ha sido un instrumento para promover la estabilidad política al aliviar desigualdades en el ingreso mediante la expansión de los servicios sociales y de los subsidios al bienestar (García de Alba y Serra, 1983). Éste constituye el lugar geométrico de las fuerzas que se encuentran detrás del crecimiento extremadamente robusto del gasto público, que aumentó pasando a representar de 8 a 42% del PNB entre 1950 y 1980 (cuadro 5).

Toma mucho tiempo cambiar, con éxito, los patrones de crecimiento socioeconómico. El modelo progresivo mexicano empezó a fallar a principios de la década de los setenta y alcanzó una pausa peligrosa en la década de los ochenta. La mayor parte de las variables económicas claves, tanto internas como externas, han perdido su capacidad dinámica de promover el desarrollo; debido a su cambio de estructura, el gasto público ya no puede ser capaz de jugar su papel previo de promotor del desarrollo; la sustitución de importaciones está agotada, al menos parcialmente; los ingresos de las exportaciones tradicionales, incluyendo el petróleo, están enfrentando mercados y precios deprimidos, las entradas de capital provenientes del exterior ya no se encuentran disponibles, en tanto que la fuga de capitales y el servicio de la deuda están reduciendo los ahorros domésticos.

Y sin embargo, ha habido muy pocos alejamientos de las estrategias de política tradicionales y ninguna de ellas ha estado debidamente consolidada después de cinco años de crecimiento económico negativo. Hasta este momento, la crisis ha sido simplemente resistida haciendo que los costos del ajuste recayeran sobre los hombros de los grupos sociales más débiles y menos organizados. No obstante, para sorpresa de muchos observadores, las instituciones políticas nacionales han mostrado una notable estabilidad para proteger el funcionamiento de la sociedad mexicana de serias alteraciones. Pero debe admitirse que las tensiones están aumentando en la medida en que los efectos distributivos regresivos del proceso de ajuste ganan fuerza, provocando un deterioro aún mayor tanto en los niveles de vida como en la legitimidad del gobierno.

Es difícil evaluar cuánto puede ser acomodado políticamente ese proceso involutivo sin que se cause daños irreparables al tejido social. De cualquier modo el costo humano de la crisis ha sido alto y aún no se le ve el fin (Ros y Lustig).

Los datos relativos a la distribución de la carga de la crisis económica son muy escasos. A pesar de ello, las cifras disponibles son suficientes para poder darse una idea cercana de los efectos del proceso de ajuste en el periodo de 1981-1984.

La participación de los salarios en el producto nacional bruto está decreciendo a una velocidad dramática. En 1981 la participación de los trabajadores se estimaba en 37.4%, y en 1984 sólo 27.7%. Los salarios mínimos reales cayeron 32% entre 1981 y 1985. En sólo dos años, el promedio de los salarios reales pagados por el gobierno disminuyó en cerca de 40% (ver cuadros 10, 11 y 12).

Las estrategias defensivas utilizadas por la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) —aceptación de menores salarios reales a cambio de mayor empleo—, la capacidad de la economía informal de absorber —en actividades de baja productividad— a los trabajadores desplazados de las actividades modernas, y una mayor emigración, explican por qué las cifras de desempleo han venido creciendo más bien lentamente a pesar de la aguda crisis económica. Sin embargo, existen signos de que durante el presente año (1986) la tasa de despidos de trabajadores ha empeorado, al grado de que podrá difícilmente ser compensada por la llamada “flexibilidad de absorción laboral” en las actividades económicas informales.

Las tasas abiertas de desempleo se incrementaron ligeramente entre

1981 y 1983 en lo que se refiere a los centros urbanos más importantes, pero siguió una tendencia opuesta los siguientes dos años para volver a crecer nuevamente en 1986 (cuadro 6). El desempleo no está distribuido en forma homogénea en todas las actividades económicas. El empleo en la rama de la producción primaria así como en la correspondiente a servicios personales y comunitarios, se elevó de 1981 a 1984, reflejando fundamentalmente la escasa demanda por el trabajo existente en el sector moderno de la economía mexicana más que una expansión genuina de las oportunidades laborales en esas actividades. De hecho, el empleo en las manufacturas decreció 12% durante el periodo 1981-1986 (cuadro 7) y se estima que se elevó en más de 20% en la industria de la construcción durante esos mismos años.

Debido a que el empleo cayó menos que el ingreso y la producción, la productividad se está contrayendo rápidamente (21% entre 1981 y 1984; ver cuadro 13) y se está convirtiendo tanto en una fuente de inflación por empuje de costos, como en una limitación de los esfuerzos exportadores.

La carga del proceso de ajuste no sólo se debe a unos salarios reales deprimidos y a un desempleo que avanza en forma significativa, sino que existe además un amplio conjunto de factores que están erosionando también el nivel de vida de la mayor parte de los grupos sociales. A partir de 1981 el gasto del gobierno en bienestar ha disminuido considerablemente, los impuestos indirectos y los precios y tarifas de los servicios públicos se han ajustado hacia arriba, la inflación conectada con algunos bienes-salario se encuentra muy por encima del índice nacional de precios al consumidor. Finalmente, el servicio de la deuda y las modificaciones en los términos de intercambio están sustrayendo una gran proporción del producto nacional bruto de su uso interno.

El gasto del gobierno en lo relativo al desarrollo social ha decrecido 23.5% en términos reales durante el periodo 1981-1984. El gasto presupuestal en servicios educativos ha disminuido 29%, en los servicios de salud 20%, y en los servicios relacionados con la seguridad social 24% (cuadros 8 y 9).

Hasta este momento, afortunadamente, las restricciones presupuestales no se han visto traducidas totalmente en un deterioro cuantitativo o cualitativo de las funciones gubernamentales relacionadas con el bienestar. La disminución en los costos, lograda mediante la reducción de los salarios reales pagados a los empleados públicos o por las

medidas dirigidas a aumentar la eficiencia de los gastos han constituido un mecanismo amortiguador. Es cierto también que al mismo tiempo los menores niveles de inversión pública han liberado recursos para financiar los gastos corrientes, de manera que los déficit presupuestales se han mantenido dentro de límites específicos. La inversión bruta fija del sector público, que solía representar más de 10% del producto nacional bruto, apenas alcanzó 6% el último año, y se estima que será de sólo 3% al finalizar 1986 (cuadro 15). De hecho, los márgenes de maniobra económica se están desvaneciendo. El país se encuentra al borde de un deterioro que podría afectar en forma duradera el crecimiento futuro debido a los efectos sobre la formación de capital tanto físico como humano.

El impacto del ajuste sobre la igualdad económica ha seguido diferentes trayectorias, pero la mayor parte de ellas posee un carácter regresivo. De 1982 a mayo de 1986 los precios de los productos básicos (tortillas, pan, frijolés, arroz, huevos, carne, leche) crecieron a tasas que oscurecieron con facilidad los aumentos de sueldos y salarios (Lustig, 1986). Adicionalmente, la expansión de los ingresos fiscales ha sido derivada, en gran parte, del cobro de impuestos indirectos o de precios mayores de los servicios públicos (energía, agua, transporte, etcétera), cosas ambas que tienen una mayor incidencia relativa sobre el presupuesto de los grupos sociales de ingresos medios o bajos.

La contribución de los impuestos indirectos a los ingresos impositivos totales se desplazó de 37% (1981) a 54% (1985), en parte como resultado del incremento de 50% en la tasa media del impuesto al valor agregado (cuadro 16). Al mismo tiempo, los subsidios al transporte urbano y al consumo de pan y tortillas se encuentran en proceso de desaparecer² después de haber representado un gasto público mayor a los 200 billones de pesos en 1984.

Finalmente el servicio de la deuda externa, aparejado a una inusual caída de los términos de intercambio (24% de 1980 a 1985), está implicando una cuantiosa transferencia de recursos al exterior que deprime aún más los mercados e ingresos domésticos. El cuadro 14 muestra cómo dichos movimientos financieros se han expandido substancialmente en la presente década, pasando de tres a más de 8% del

² Los precios de las tortillas se más que duplicaron en los primeros siete meses de 1986 y las tarifas del metro en la ciudad de México se incrementaron 20 veces en agosto del mismo año.

producto nacional bruto.³ Si se incorpora a este panorama el reciente colapso de los precios del petróleo y las salidas monetarias relacionadas con la amortización de la deuda y la fuga de capitales, no parece exagerado afirmar que recursos equivalentes a 10 o 15% del producto nacional bruto están siendo sustraídos sistemáticamente de su uso interno, deteriorando enormemente los resultados en términos de crecimiento así como en lo referido a perspectivas futuras.

IV.

A partir de lo analizado puede justificarse llegar a algunas conclusiones:

1. La necesidad del ajuste en la economía mexicana surge como resultado de dos diferentes conjuntos de problemas contemporáneos que se encuentran interrelacionados. Por una parte existe una desalineación acumulada de las exportaciones nacionales con respecto a las tendencias de los mercados mundiales, lo que ha sido amplificado enormemente por los efectos de la crisis de la deuda. Por otra, las disminuidas respuestas dinámicas del proceso de sustitución de importaciones así como las políticas altamente expansivas de los años setenta, presionaron claramente para que se dieran cambios en la política económica.

2. Una vez reconocida la necesidad del ajuste, las estrategias elegidas demostraron ser insuficientes en varios sentidos. Desde un punto de vista puramente económico, la política gubernamental enfatizó las medidas de corto plazo del tipo recomendado por el FMI para deprimir la demanda, haciendo a un lado y aun eluyendo los cambios estructurales complementarios referidos a la producción. Al no resolver los desequilibrios básicos que se presentan por el lado de la oferta, las políticas recesivas deben ser mantenidas por periodos cada vez más largos, con crecientes costos humanos. En consecuencia, el ajuste ha resultado ser socialmente ineficiente, no sólo porque las pérdidas de ingreso se han concentrado en los grupos más débiles de la población sino también porque al erosionarse el marco que da sostén al crecimiento y al empleo, la recesión se extiende en el tiempo. Finalmente, los acomodos recientes implican un debilitamiento de los procesos de formación de capital material y humano y de solidaridad política, por lo que las

³ Antes de 1982 las entradas de crédito y capital externo fueron mayores que los pagos por concepto del servicio de la deuda más las transferencias de capitales al exterior.

pérdidas en términos de un crecimiento dinámico surgen inevitablemente como uno de sus productos derivados.

3. A partir de 1982 el objetivo central de la política económica ha sido formulado para abolir la inflación. Sin embargo, dada la observada inflexibilidad a la baja de los sueldos y salarios nominales, el mecanismo fundamental que ha sido empleado para distribuir la carga del ajuste ha consistido en el manejo de un margen diferencial en los precios de los factores. De esta manera, paradójicamente, la inflación y el ajuste, en lugar de ser enemigos, se convirtieron en socios funcionales en la alteración de las participaciones del ingreso en las proporciones requeridas, aun cuando se hiciera caso omiso de la justicia económica.

4. Es difícil ser optimista en lo que se refiere a los remedios aplicados dado el estado prevaleciente en la económica internacional. En el caso latinoamericano, el aminoramiento del costo humano de la crisis requeriría un esfuerzo de cooperación verdaderamente internacional mediante el cual los gobiernos, tanto de las naciones desarrolladas como de los países en vías de desarrollo, establecieran compromisos políticos fuertes y se otorgaran unos a otros concesiones significativas. México necesita urgentemente el acceso a los mercados de bienes y financieros, con una condicionalidad menos rígida que permita movimientos apropiados de ajuste y que se den en forma sincronizada tanto en la demanda como en la oferta. En este sentido, el acuerdo recientemente firmado con el FMI representa un paso adelante, aun cuando haya llegado un poco tarde para México y así evitar la recesión de 1986.

5. Los esfuerzos domésticos llevados a cabo parecen ser igualmente rigurosos. Las políticas tradicionales de sustitución de importaciones como marco institucional, deberían ser modificadas en gran medida a fin de: *a*) incrementar la productividad, la competencia y el cambio tecnológico; *b*) crear una capacidad exportadora dinámica, y *c*) reducir los desequilibrios fiscales y monetarios. Al mismo tiempo, resulta imperativo reconstruir el consenso político entre el Estado y la sociedad civil, roto como consecuencia del desorden económico. De esta manera, la democratización en el diseño y puesta en marcha de la política económica constituye una condición previa, tanto para aminorar los costos sociales del ajuste como para incrementar la solidaridad doméstica en el grado que sea requerido para salir del actual estancamiento.

ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO 1. *Matriculación educativa*
(miles de estudiantes inscritos)

	<i>Total</i>	<i>Escuela primaria</i>	<i>Educación intermedia</i>	<i>Universidad</i>
1950	3 051.9	2 867.3	106.9	29.8
1980	20 973.3	14 666.3	4 299.6	937.9
1985	22 400.1	15 124.2	6 076.7	1 199.2
<i>Tasa de crecimiento</i>				
1950-1980	6.6	6.0	13.1	12.2
1980-1985	1.3	0.6	7.2	5.0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Estadísticas históricas de México*, México, 1985, y para 1985, Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Planeación Educativa, Dirección General de Programación.

CUADRO 2. *Sistema de seguridad social*

	<i>Miles de camas ^a</i>	<i>Millones de miembros</i>
1950		1.1
1960		4.0
1965	14.3	8.6
1970	40.2	12.2
1980	56.4	30.8
1981	53.0	34.0
1983	52.4	33.8

^a Incluye las instituciones de seguridad social y los hospitales públicos.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Estadísticas históricas de México*, México, 1985.

CUADRO 3. *Mortalidad infantil*

<i>Por millares de los nacidos vivos</i>	
1950	96.2
1960	74.2
1969	66.7
1980	38.8
1982	33.0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Estadísticas históricas de México*, México, 1985.

CUADRO 4. *Esperanza de vida al nacimiento*

<i>Años</i>	
1940	41.5
1950	49.7
1960	58.9
1970	61.9
1980	64.9

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Estadísticas históricas de México*, México, 1985.

CUADRO 5. *Sector público: ingreso y gasto*
(billones de pesos y porcentajes)

	<i>Ingreso</i>		<i>Gasto</i>	
	<i>Pesos</i>	<i>Porcentaje del PNB</i>	<i>Pesos</i>	<i>Porcentaje del PNB</i>
1950	3.64	8.6	3.46	8.2
1960	19.46	12.2	20.15	12.6
1970	109.06	24.5	109.26	24.6
1980	2 050.98	47.9	178.00	41.6

FUENTE: Banco de México, *Informe anual*, varios números.

CUADRO 6. *Tasas de desempleo abierto*
(porcentajes)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986 ^a
México, D.F.	3.9	4.0	6.3	5.8	4.9	4.9
Guadalajara	5.8	5.0	7.4	6.1	3.4	2.6
Monterrey	4.2	4.9	9.8	7.5	5.3	5.0

^a Enero-marzo.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Cuaderno de información oportuna*, varios números.

CUADRO 7. *Índice de empleo en las actividades manufactureras*
(1981 = 100.0)

	1981	100.0
	1982	97.5
	1983	88.2
	1984	87.3
	1985	89.2
	1986 ^a	87.9

^a A enero.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Cuaderno de información oportuna*, varios números.

CUADRO 8. *Estructura del gasto público*
(porcentajes)

	1975	1984
Total	100.0	100.0
Desarrollo social	21.1	13.2
Desarrollo económico	61.3	34.2
Industria	8.6	4.6
Agricultura	11.3	5.5
Comercio	7.3	5.2
Comunicaciones	8.4	5.0
Turismo	0.3	0.1
Administración y defensa ^a	17.6	52.6

^a Incluye el servicio de la deuda pública.

FUENTE: *Informe de Gobierno*, varios números.

CUADRO 9. *Gasto en desarrollo social*
(billones de pesos de 1970)

	<i>Total</i>	<i>Educación</i>	<i>Salud</i>	<i>Seguridad social</i>
1981	70.7	23.0	3.5	28.1
1982	73.2	23.8	3.8	27.2
1983	52.6	15.2	2.7	22.1
1984	54.1	16.4	2.8	21.3
<i>Tasas de crecimiento</i>				
1981-1984	—23.5	—28.7	—20.0	—24.2

FUENTE: Nora Lustig, "Economic crisis and living standards in Mexico." (Mimeo), El Colegio de México, 1986.

CUADRO 10. *Distribución del ingreso*
(porcentajes)

	<i>1981</i>	<i>1982</i>	<i>1983</i>	<i>1984</i>
Producto nacional bruto	100.0	100.0	100.0	100.0
Ingreso salarial	37.4	35.8	28.8	27.7
Ingreso no salarial	54.5	54.3	60.9	62.4
Impuestos indirectos				
menos subsidios	8.1	9.9	10.3	9.9

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Sistema de Cuentas Nacionales*, 1980-1982 y 1980-1984, México, 1983 y 1985.

CUADRO 11. *Salarios del sector público*

	<i>Salario promedio anual por persona (miles de pesos)</i>	<i>Índice de precios al consumidor (1981 = 100.0)</i>	<i>Salarios deflactados (miles de pesos de 1981)</i>
1981	202.8	100.0	202.8
1982	304.3	198.8	153.1
1983	419.1	359.4	116.6

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Sistema de Cuentas Nacionales: Cuentas de producción del Sector Público, 1975-1983*, y Banco de México, *Informe anual*, varios números.

CUADRO 12. *Indicadores salariales*
(porcentajes)

	1981	1982	1983	1984	1985
Salarios mínimos reales (1981 = 100.0)	100.0	95.8	73.7	69.0	67.8
Salario real promedio pagado (1981 = 100.0)	100.0	97.6	71.8	68.3	
Salarios reales de las cuentas nacionales ^a (1981 = 100.0)	100.0	77.3	62.5	63.4	

^a Salarios nominales deflactados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

FUENTE: CEPAL, *Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe*, México, 1985 (LC/MEX/L. 33), e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Sistema de cuentas nacionales de México: 1982-1984*, México, 1985.

CUADRO 13. *Productividad de la fuerza laboral*^a
(1981 = 100.0)

	1981	1982	1983	1984
Total	100	94	81	79
Sector primario	100	98	100	100
Sector industrial	100	94	83	83
Sector servicios	100	98	93	92

^a La productividad está definida como el valor bruto por trabajador.

FUENTE: Estimado con datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas Históricas de México, México, 1985.

CUADRO 14. *Transferencias de ingresos al exterior*
(millones de dólares de 1980)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Pago de factores neto	6.209	8.817	11.405	8.868	9.118	7.853
Efectos de los términos de intercambio	—	0.136	6.000	8.257	8.279	8.355
Transferencias corrientes totales	6.209	8.952	17.405	17.125	17.125	16.208
Total como porcentaje del PNB	3.3	4.5	8.7	9.0	8.8	8.0

FUENTE: Estimaciones realizadas con datos de ECLAC.

CUADRO 15. *Formación de capital*
(billones de pesos de 1970 y porcentajes del PNB)

	1981		1982		1983		1984		1985	
	Pesos	%								
Inversión total bruta	272	30	195	22	146	17	156	17	179	19
Inversión fija bruta	226	25	190	21	137	16	147	16	155	17
Privada	128	14	106	12	80	10	87	10	98	11
Pública	98	11	84	9	57	6	58	6	57	6
Cambio en inventarios	46	5	5	1	9	1	9	1	24	2

FUENTE: CEPAL, *Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe*, México, varios números.

CUADRO 16. *Ingresos derivados de impuestos*
(trillones de pesos y porcentajes)

	1981		1982		1983		1984		1985	
	Pesos	%								
Ingreso impositivo										
total	0.647	100	0.967	100	1.828	100	3.036	100	4.750	100
Impuestos directos	0.339	52	0.464	48	0.727	40	1.204	40	1.890	39
Impuestos indirectos	0.241	37	0.418	43	1.015	56	1.695	56	2.580	54
Impuestos al comercio exterior	0.067	11	0.085	9	0.086	4	0.137	4	0.280	7

FUENTE: CEPAL, *Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe*, México, varios números.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco de México, *Informe anual*. México, varios números.
- ECLAC, *Notas para el estudio de América Latina y el Caribe*. México, varios números.
- García-Alba, P. y Serra, J., *Causas y efectos de la crisis económica de México*. El Colegio de México, México, 1983.
- Hernández Laos, E. y Córdoba, J., *La distribución del ingreso en México*. Centro de Investigaciones para la Integración Social, México, 1982.
- Ibarra, D., *Comments on the Mexican Financial System*. UNU-ECLAC, Seminario sobre la liberalización financiera, Tokio, 1985.
- Ibarra, D., *Crisis y sector externo en América Latina*. (Próxima publicación en *Diálogo Interamericano*). Mimeografiado, Santiago, Chile, 1986.
- Ibarra, D., *Notas sobre el financiamiento del desarrollo latinoamericano*. Mimeografiado, México, 1986.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática, *Estadísticas históricas de México*. Tomos I y II, México, 1985.
- Kalifa, Salvador, *La distribución del ingreso en México*, Mimeografiado, México, 1982.
- Lustig, N., *Economic Crisis and Living Standards in Mexico: 1982-1985*. El Colegio de México. Mimeografiado, México, 1986.
- Olson, M., *The Rise and Decline of Nations*. Yale University Press, New Haven, 1982.
- Ros, J. y Lustig, N., *Stabilization and Adjustment in Mexico: 1982-1985*. Proyecto del UNU/WIDER, mimeografiado, México, 1986.